



JUICIO ORAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: JOS-PP-83/2021

DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA

DENUNCIADOS: JESÚS ALONSO
MONTES PIÑA Y PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MAGISTRADO **PONENTE:**
LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD.

Hermosillo, Sonora, a siete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTAS las actuaciones del juicio oral sancionador, identificado con la clave **JOS-PP-83/2021**, integrado con motivo de la denuncia presentada por el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, en contra del C. Jesús Alonso Montes Piña, en su carácter de candidato a la Presidencia del Ayuntamiento de mérito, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por la difusión de propaganda político-electoral prohibida, derivado de la presunta colocación de imágenes impresas en el cerco ocupado por un ente público municipal y en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, así como también en contra del instituto político antes señalado, por su probable responsabilidad en la modalidad de *culpa in vigilando*; todo lo demás que fue necesario ver; y,

RESULTANDOS

I. Antecedentes: De los hechos narrados en la denuncia, así como de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral. Como hecho notorio, se tiene que por Acuerdo CG31/2020¹, de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora.

¹ Acuerdo CG31/2020, del índice del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; disponible para consulta en el enlace <http://ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG31-2020.pdf>

2. Aprobación de calendario electoral en Sonora. Por acuerdos CG38/2020 y CG48/2020², de fechas veintitrés de septiembre y quince de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó lo atinente al calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora.

3. Interposición de la denuncia. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Rio Colorado, Sonora, presentó ante la citada autoridad una denuncia en contra del C. Jesús Alonso Montes Piña, en su carácter de candidato a la Presidencia del citado Ayuntamiento, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por colocar y adherir propaganda política con su nombre y la del partido político de su candidatura, así como su emblema, sin permiso y en un lugar ocupado por una entidad pública municipal, en específico en la avenida Nayarit y calle 10, sobre el cerco perimetral del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la mencionada localidad, así como en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad, lo anterior en contravención con los artículos 208, párrafo cuarto, y 218, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como también en contra del instituto político antes señalado, por su probable responsabilidad en la modalidad de *culpa in vigilando*.

II. Sustanciación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

1. Admisión de la denuncia. Mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, admitió la denuncia interpuesta por Francisco Javier Morfin Padilla, registrándola bajo número de expediente IEE-JOS-119/2021, en donde, entre otras cosas, se solicitó el auxilio de la Secretaría Ejecutiva del citado organismo electoral, para efecto de que realizara las diligencias señaladas en el auto de mérito; asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de admisión y desahogo de pruebas referida en el artículo

² Acuerdos CG38/2020 y CG48/2020, ambos del índice del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; disponible para consulta en los enlaces <http://ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG38-2020.pdf> y <http://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG48-2020.pdf>, respectivamente.

300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, solicitando el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de mérito para la práctica de las notificaciones necesarias.

2. Escritos de comparecencia del denunciante. Mediante escritos presentados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha uno y tres de junio de dos mil veintiuno, el ciudadano Heriberto Muro Vásquez, en su carácter de representante propietario del Movimiento Ciudadano ante dicho Instituto, compareció al presente procedimiento a señalar correo electrónico para que se le remitiera la liga de acceso a la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, así como para comparecer a dicha audiencia llevada a cabo dentro del expediente IEE/JOS-119/2021.

3. Contestación a denuncia. Mediante sendos escritos presentados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, el tres de junio de dos mil veintiuno, el Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante propietario ante el Instituto mencionado, C. Heriberto Muro Vásquez, y el ciudadano denunciado Jesús Alonso Montes Piña, por su propio derecho, respectivamente, comparecieron al presente procedimiento a dar contestación a la denuncia instaurada en su contra.

4. Audiencia de admisión y desahogo de pruebas. Con fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de admisión y desahogo de pruebas de manera virtual, en atención a las medidas sanitarias preventivas implementadas por la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante acuerdos JGE07/2020 y JGE10/2020, derivados de la contingencia COVID-19 que se vive actualmente en el país; audiencia a la que compareció el C. Christian Elías Rodríguez Valdez, en representación del ciudadano denunciado Jesús Alonso Montes Piña, así como la comparecencia del C. Heriberto Muro Vásquez, en representación del Partido Movimiento Ciudadano; asimismo, se hizo constar la incomparecencia de la parte denunciante.

En la audiencia de mérito, el órgano instructor del Instituto electoral local se pronunció sobre la admisión de las probanzas ofrecidas por las partes, dispensando posteriormente el desahogo de las admitidas por tratarse de documentales tanto privada como públicas, las cuales según motivó, por su naturaleza presupone su desahogo, aunado a que sobre ellas versó el acta de oficialía electoral que obra en autos, declarando con ello, por agotadas las fases que integran la audiencia antes señalada.

5. Expedición del Acta Circunstanciada de Oficialía Electoral. Con fecha cinco de junio del presente año, la licenciada Aurora del Rocío Vega Cota, en su carácter de Comisionada Oficial Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acta Circunstanciada de Oficialía Electoral en la que en uso de su facultad de oficialía electoral con fe pública, llevó a cabo las diligencias ordenadas en el mencionado auto admisorio, a fin de dar fe de la existencia y contenido de la publicidad a que el denunciante hace referencia en su escrito de denuncia.

6. Remisión del expediente e Informe circunstanciado. El treinta de julio del año en curso, mediante oficio IEE/DEAJ-563/2021, el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, remitió a este Tribunal las constancias atinentes al expediente número IEE/JOS-119/2021, así como el informe circunstanciado respectivo.

III. Juicio Oral Sancionador ante este Tribunal Estatal Electoral.

1. Recepción. Por auto de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, este Tribunal tuvo por recibido el expediente a que se hizo referencia en el numeral seis de la fracción que antecede, el cual se ordenó registrar como Juicio Oral Sancionador en el Libro de Gobierno correspondiente, bajo clave JOS-PP-83/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Leopoldo González Allard; por otro lado, se tuvo por recibido el informe circunstanciado correspondiente, así como diversas documentales que remitió la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral Local, a que se refiere el artículo 301 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y se fijaron las doce horas con cuarenta minutos del día cuatro de agosto del presente año, para que tuviera verificativo de manera virtual la audiencia de alegatos a que se refiere el artículo 304, fracción I, de la Ley electoral en comento.

2. Audiencia de alegatos. Conforme a lo ordenado en el auto de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno señalado en el numeral que antecede, a las doce horas con cuarenta minutos del día cuatro de agosto del año que transcurre, tuvo lugar la audiencia virtual de alegatos, en la cual se hizo constar la comparecencia de los denunciados, C. Jesús Alonso Montes Piña y el Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante, C. Heriberto Muro Vásquez; asimismo, en la audiencia de mérito se asentó la incomparecencia de la parte denunciante, por lo que se le tuvo por perdido el derecho a realizar alegatos de clausura.

3. Citación para audiencia de juicio y resolución. En términos de lo previsto por la fracción IV del artículo 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, una vez concluida la audiencia de alegatos, se citó a la audiencia de juicio a las nueve horas del día siete de agosto del presente año, para efecto de emitir resolución en el presente asunto, la cual se dicta bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Estatal Electoral de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente Juicio Oral Sancionador, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 22, párrafo veintiséis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y en los diversos artículos 303, 304 y 305, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; en virtud de que la denuncia bajo estudio tiene relación con la supuesta difusión indebida de propaganda político-electoral y, por tanto, encuadra dentro de lo previsto en el artículo 298, fracción I del mismo ordenamiento.

SEGUNDO. Finalidad del Juicio Oral Sancionador. La finalidad específica del Juicio Oral Sancionador está debidamente precisada, en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por los artículos 298 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

TERCERO. Fijación del Debate.

1. Denuncia. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, presentó ante la citada autoridad una denuncia en contra del C. Jesús Alonso Montes Piña, en su carácter de candidato a la Presidencia del citado Ayuntamiento, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por colocar y adherir propaganda política con su nombre y la del partido político de su candidatura, así como su emblema, sin permiso y en un lugar ocupado por una entidad pública municipal, en específico en la avenida Nayarit y calle 10, sobre el cerco perimetral del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la mencionada localidad, así como en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad, lo anterior en contravención a los artículos 208, párrafo cuarto, y 218, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Sonora, así como también en contra del instituto político antes señalado, por su probable responsabilidad en la modalidad de *culpa in vigilando*.

Al respecto, el denunciante manifiesta que el veintiuno de mayo del presente año, aproximadamente a las 11:00 horas le comunicaron que personas que dijeron ser promotores del candidato de nombre Jesús Alonso Montes Piña, habían pegado propaganda electoral que hacía referencia a dicha persona, en el cerco del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicado en la avenida Nayarit y calle 10 de esa ciudad, así como en varios cercos de predios, sin pedir permiso a los propietarios.

Menciona, que de igual forma se realizó lo mismo un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad.

Describe, que la propaganda política contenía la imagen de la cara y busto, del candidato de nombre Jesús Alonso Montes Piña, acompañada de la frase "MONTES PIÑA, PRESIDENTE SLRC", además contenía el logotipo y nombre del Partido Movimiento Ciudadano, haciendo alusión a la candidatura a la Presidencia del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora.

Agrega, que aproximadamente a las 11:30 horas del mismo día asistió a los referidos lugares y al estar en ellos observó y tomó fotografías de la propaganda electoral antes descrita.

Señala que la propaganda político electoral denunciada, precisada en los párrafos anteriores, es de las consideradas como prohibidas por los artículos 208, párrafo cuarto, y 218, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Por último, señala que con todo lo anterior se acredita también la responsabilidad del Partido Movimiento Ciudadano, bajo el esquema de "*culpa in vigilando*", al encontrarse obligado a vigilar la conducta de sus candidatos, simpatizantes y/o personas relacionadas con sus actividades, según así lo ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2. Contestación de la denuncia por parte de los denunciados Jesús Alonso Montes Piña y el Partido Movimiento Ciudadano. Mediante los escritos presentados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el

Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, con fecha tres de junio de dos mil veintiuno, el Partido Movimiento Ciudadano y el C. Jesús Alonso Montes Piña, respectivamente, dieron contestación a la denuncia presentada en su contra, haciendo valer de manera coincidente los siguientes argumentos:

Señalan que no le asiste la razón al denunciante ante la inexistencia de la conducta que les atribuye, pues resultan totalmente ineficaces las pruebas presentadas consistente en dos copias simples de fotografías, debido a que, al ser pruebas técnicas, dada su naturaleza tienen el carácter de imperfectas ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, por lo que se debe considerar que ese tipo de probanzas por sí solas son insuficientes, si no existen mayores elementos que las adminiculen, ello de conformidad con el criterio adoptado por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”**.

Por tanto, dado que no existen pruebas fehacientes, determinantes, objetivas e incontrovertibles que demuestren que la denunciada haya transgredido las normas que aduce el representante propietario del Partido Morena, se deberá determinar la inexistencia de la conducta atribuida.

3. Litis. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este Tribunal Electoral consiste en dilucidar, si en el caso, se actualiza o no la difusión de propaganda electoral prohibida, por parte del C. Jesús Alonso Montes Piña, como candidato a Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, por el Partido Movimiento Ciudadano, derivado de la presunta colocación de imágenes impresas en el lugar ocupado por un ente público municipal y en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad en los términos que refiere el denunciante; y en caso de resultar afirmativo, este órgano jurisdiccional deberá pronunciarse respecto de la sanción que resulte aplicable, así como lo atinente al instituto político en comento, por su responsabilidad atribuida en la modalidad de *culpa in vigilando*.

CUARTO. Consideración previa.

Previamente a entrar al estudio de fondo, este Tribunal considera de primordial importancia, dejar establecido que, para la sustanciación, análisis y resolución de los diversos juicios relativos al régimen sancionador electoral, en tanto que entrañan la potestad del Estado de castigar una infracción o *ius puniendi*, se deben atender en su integridad ciertos principios del derecho penal, a saber:

- a. Reserva legal (lo que no está prohibido, está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción;
- b. El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;
- c. La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y,
- d. Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (*odiosa sunt restringenda*), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos

En este sentido, para privilegiar los derechos humanos del encausado, así como sus garantías de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, plenamente vigentes en este tipo de procedimientos, este Órgano Colegiado, procederá a analizar el caso planteado a la luz de los mencionados principios.

Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, la Jurisprudencia 7/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- *Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los*

principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

QUINTO. Estudio de fondo.

Precisado lo anterior, se procede a examinar los diversos aspectos de la conducta presuntamente infractora de la normatividad electoral.

1. Fijación de los hechos imputados, presuntamente constitutivos de infracción a la normatividad electoral.

Del análisis de la denuncia presentada así como de las diversas constancias que integran el presente expediente, este Tribunal aprecia que la materia de la controversia consiste en lo siguiente:

DENUNCIADOS
C. Jesús Alonso Montes Piña, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, así como el Partido Movimiento Ciudadano.
CONDUCTA IMPUTADA
Respecto al C. Jesús Alonso Montes Piña, se le atribuye la presunta difusión de propaganda político-electoral prohibida, mediante colocación de imágenes

impresas en el lugar ocupado por una entidad pública municipal, en específico en la avenida Nayarit y calle 10, sobre el cerco perimetral del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la mencionada localidad, así como en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad; y en lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano, se le atribuye la responsabilidad en la modalidad de “culpa in vigilando”.

HIPÓTESIS JURÍDICAS

Artículo 298, fracción I, en correlación con el diverso numeral 208, párrafo cuarto, y el artículo 218, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

2. Pruebas.

Previo a dilucidar si se actualiza o no la infracción señalada, es preciso verificar la existencia de los hechos denunciados a partir de los medios de prueba que obran en el expediente y de lo manifestado por las partes en el presente procedimiento.

En ese sentido, acorde con la argumentación recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008 de rubro: “**ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL**”³, deberá observarse uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio en relación con las partes involucradas dentro del presente asunto, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes.

De conformidad con la transcripción de la audiencia de admisión y desahogo de pruebas celebrada el cuatro de junio de dos mil veintiuno, misma que obra en autos se advierte la admisión de las pruebas siguientes:

Por parte del denunciante:

1. “...*Documental privada. Consistente en dos imágenes impresas donde se advierte y constan los hechos denunciados al C. JESÚS ALONSO MONTES PIÑA, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal, del Municipio de San Luis Río Colorado Sonora, registrado para la contienda por el Partido Político Movimiento Ciudadano, propaganda colocada en el cerco perimetral del almacén de del Organismo Operador Municipal Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del municipio de San Luis Río, Colorado, Sonora. Ubicado en la Avenida Nayarit y calle 10 de esta ciudad de San Luis Río Colorado Sonora. Y en un poste de cemento propiedad de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en avenida 16 de Septiembre y calle Sexta*”

³ Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 y 120.

de esta misma ciudad, Siendo este un lugar prohibido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora específicamente en el artículo 208 párrafo cuarto. Esta prueba la relaciono con los hechos 3, 4 y 5 de la presente denuncia mismas que se insertan a continuación.”

Por parte del ciudadano denunciado Jesús Alonso Montes Piña:

1. *“DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en escrito de deslinde de diversas publicaciones de propaganda falsa y maliciosa en redes sociales presentado el día 27 de mayo del presente año.”*
2. *“DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en escrito de deslinde de diversas publicaciones de propaganda falsa y maliciosa en redes sociales presentado el día 27 de mayo del presente año.”*

Por parte del Partido Movimiento Ciudadano:

“Documental publica. – consistente en la certificación que se acompaña al presente para acreditar la personalidad con que me ostento.

Documental publica. Consistente en escrito de deslinde de diversas publicaciones de propaganda falsa y maliciosa en redes sociales de fecha 27 de mayo del presente año, presentado por Jesús Alonso Montes Piña, candidato a presidente municipal del San Luis río Colorado, postulado por movimiento ciudadano, la cual hacemos nuestra.

Documental publica consistente en deslinde de actos de terceros que pudieran infringir el contenido de las leyes electorales de fecha 31 de mayo del presente año, presentada por Jesús Alonso Montes Piña, candidato a presidente municipal de San Luis Río Colorado, postulado por Movimiento ciudadano, la cual hacemos nuestra.”

Asimismo, se cuenta con acta circunstanciada de oficialía electoral, de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, cuyo desahogo fue ordenado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mediante auto de fecha veintinueve de mayo del año en curso, y la cual consistió en dar fe de la existencia y contenido de la propaganda político-electoral impresa objeto de la denuncia, ubicados en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

Valoración legal y concatenación probatoria

De conformidad con el artículo 300, párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, las pruebas admisibles en el juicio oral sancionador son la documental y la técnica.

En ese sentido, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Por su parte, de conformidad con el artículo 290 de la Ley electoral local, las pruebas documentales privadas, tomando en consideración la propia y especial

naturaleza de las mismas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En cuanto a las pruebas técnicas, éstas sólo alcanzan valor probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros elementos de autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, porque de la relación que guardan entre sí generarán convicción sobre la veracidad de lo afirmado.

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior, de rubro: **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.”**.

En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas que las puedan perfeccionar o corroborar.

3. Marco constitucional y legal aplicable a la conducta objeto de infracción.

Sobre la base de los hechos, corresponde analizar si la conducta denunciada constituye o no infracción a la normatividad electoral, por lo que resulta necesario establecer el marco legal y teórico aplicable a la temática sobre la que aquí se resuelve.

En ese sentido, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece:

“ARTÍCULO 208.-

[...]

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general.

La propaganda electoral señalada en el párrafo anterior, quedará prohibida a los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, cuando se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas

*electrónicas, postes o similares, ya sean éstos de uso común o privado, así como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de carga. Para el cumplimiento de esta disposición, los organismos electorales velarán por su observancia y adoptarán las medidas a que hubiere lugar.
[...]*

“ARTÍCULO 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate.”

“ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

[...]

VIII.- La contratación o adquisición de propaganda de carácter político o electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión prohibida; y

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.”

“ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, instruirá el juicio oral sancionador establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la presente Ley;

[...]

(Lo resaltado es nuestro).

Finalmente, el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, establece lo siguiente:

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

[...]

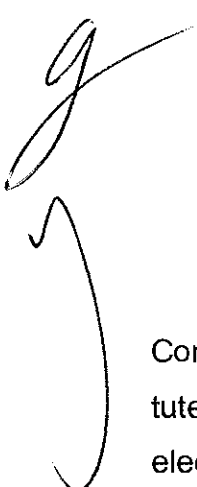
La interpretación sistemática y funcional de los anteriores preceptos legales, no puede ser otra que aquella que permita concluir que, en primer término, dentro de los procesos electorales, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, instruirá el juicio oral sancionador establecido, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la propia Ley; que la propaganda electoral, de conformidad con lo establecido en el propio artículo 208, consiste en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o

coaliciones, a la ciudadanía en general; asimismo, que dicha propaganda electoral quedará prohibida a los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, cuando se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes o similares, ya sean éstos de uso común o privado, así como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de carga; además con base al descrito artículo 218, no podrá distribuirse propaganda electoral de ningún tipo oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos; asimismo, que constituyen infracciones a la Ley de la materia, los candidatos a cargos de elección popular que realicen dichos actos; y finalmente, que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.


Asimismo, de los preceptos normativos citados, queda de manifiesto que la finalidad de la propaganda electoral son todos aquellos actos tendentes para lograr un posicionamiento ante el electorado.

De igual manera, resulta evidente que los legisladores establecieron términos y alcances para la realización de dichas actividades a fin de preservar la equidad e imparcialidad en la contienda y con ello los principios rectores en materia electoral, teniendo como consecuencia que la comisión de difusión de propaganda electoral prohibida deba sancionarse en términos de la legislación electoral.

Así, se puede advertir que la difusión de propaganda electoral prohibida a través de cualquier medio previsto en la legislación se actualiza siempre que:

- 
1. Se corrobore de forma fehaciente su existencia y actualización.
 2. La produzca y difunda un partido político, coalición o candidato, y,
 3. Tenga como objetivo fundamental manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partido o coalición.

Con base en las anteriores premisas, se desprende que el bien jurídicamente tutelado mediante la prohibición legal de realizar actos de difusión de propaganda electoral prohibida, consiste en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, el cual, no se garantizaría si se realizan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse ante la ciudadanía para la obtención del voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo resultado, es decir, inequidad en la contienda electoral.



puesto que, la promoción o difusión de un precandidato o candidato en un lapso más prolongado, coloca a éste en una situación de ventaja indebida sobre sus adversarios, generándose una mayor oportunidad de difundir su nombre e imagen, propuestas, así como su plataforma electoral, en detrimento de los demás participantes.

Bajo esas consideraciones, en el presente asunto, este Tribunal Electoral debe revisar si la propaganda político-electoral prohibida denunciada reúne de manera concurrente los elementos legales para dilucidar si se actualiza o no la existencia de la infracción aducida.

4. Presunción de inocencia como estándar probatorio aplicable.

Acorde con el criterio asumido en la Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores en materia electoral, el cual tiene tres vertientes:

- a) como regla de trato al individuo bajo proceso;
- b) como regla probatoria; y
- c) como regla de juicio o estándar probatorio.

Como estándar probatorio, la presunción de inocencia es un criterio para indicar cuando se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que el material convictivo de cargo (aquel encaminado a justificar la comisión de la conducta prohibida) debe satisfacer a efecto de considerarse suficiente para condenar.

Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la inocencia) y los conraindicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

En un sentido similar, la Sala Superior estableció que un método compatible con la citada presunción en los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

I. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

II. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado; esto es, se descarte la hipótesis de inocencia alegada por la parte acusada.

En el caso concreto, en aplicación del principio de presunción de inocencia para tener por acreditada la infracción que aduce el denunciante, este Tribunal debe advertir, que los datos que ofrece el material probatorio que obra en el expediente sean consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, en el sentido de establecer que el ciudadano denunciado Jesús Alonso Montes Piña, en forma explícita o unívoca e inequívoca, realizó difusión de propaganda electoral prohibida, a través de la colocación de imágenes impresas en lugares ocupados por entes públicos, ubicados en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

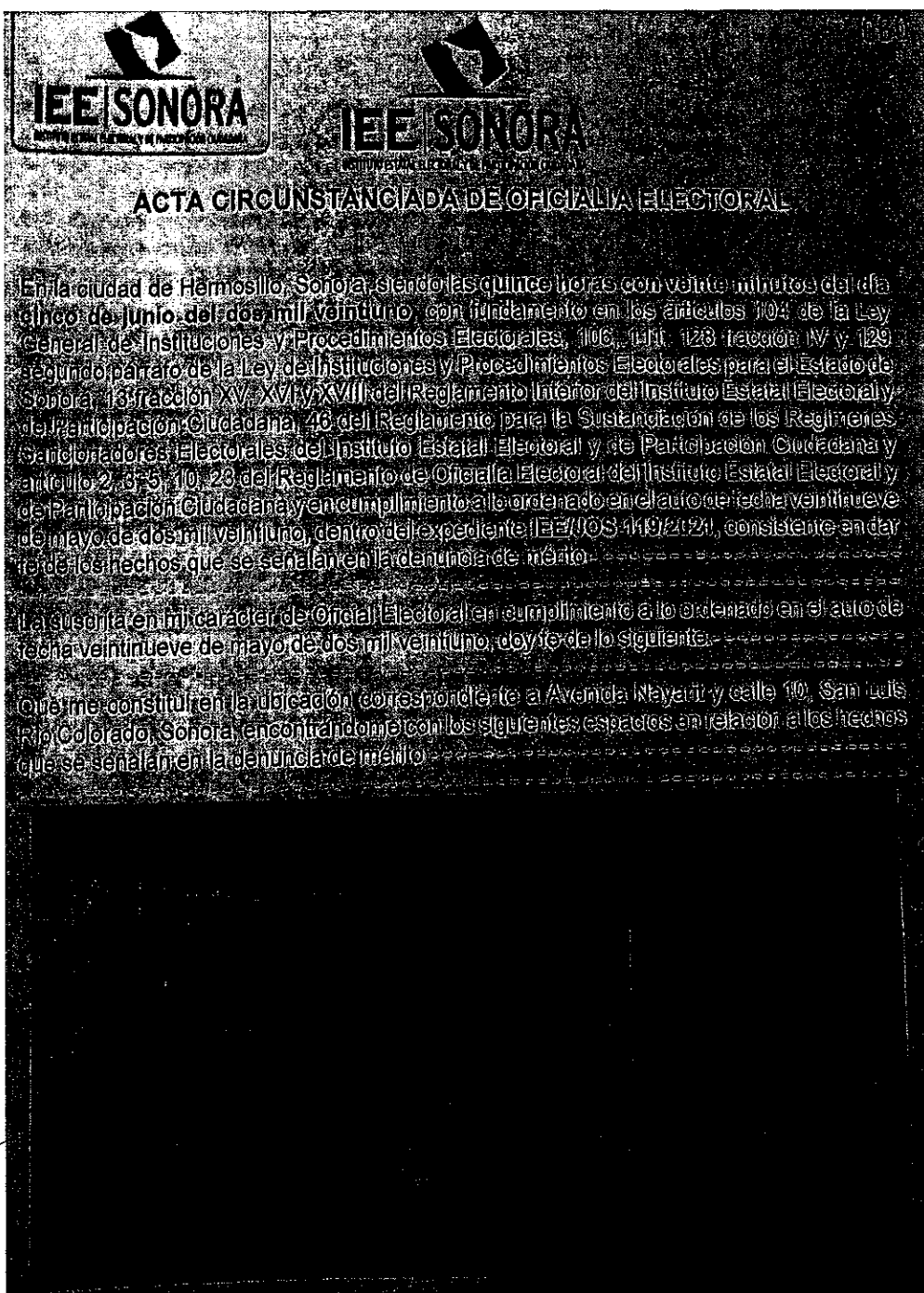
5. Análisis y valoración de las pruebas.

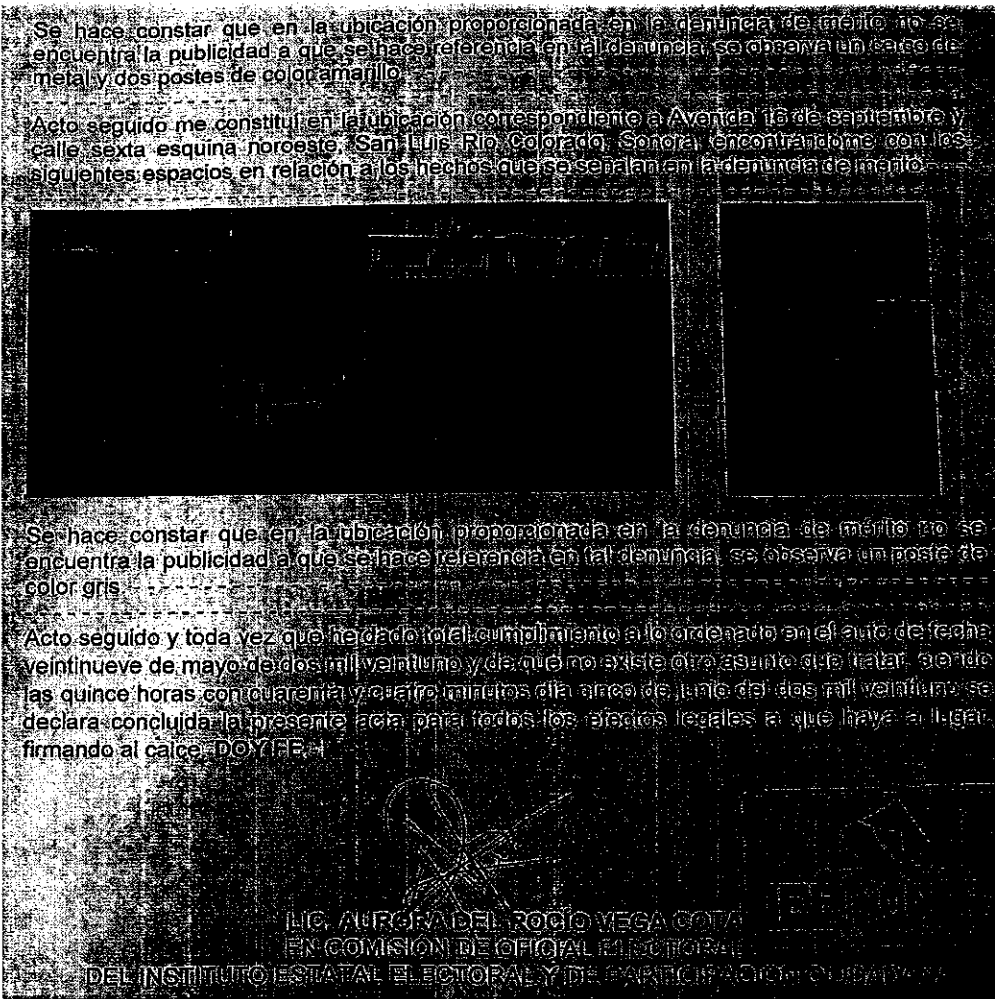
Una vez delimitadas las conductas atribuidas al C. Jesús Alonso Montes Piña y al Partido Movimiento Ciudadano, este último por la responsabilidad en la modalidad de *culpa in vigilando*, este Tribunal procede a analizar el acervo probatorio existente en autos y admitido en audiencia de admisión y desahogo de pruebas, a fin de verificar si en la especie, se acredita la existencia de las conductas motivo de infracción, en términos de lo establecido por los artículos 289 y 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

En ese sentido, resulta importante establecer que las afirmaciones contenidas en la denuncia que motivó el presente juicio tienen y se les concede crédito probatorio a título indiciario, de conformidad con lo previsto por los artículos 289 y 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; precisamente porque, como denuncia de juicio oral sancionador, satisface las exigencias que el artículo 299 del mismo Ordenamiento Procesal requiere para el efecto, toda vez que fue presentada por escrito y contiene la reseña de los hechos motivantes del inicio y seguimiento del presente juicio.

Por otro lado, de las probanzas ofrecidas por el denunciante para acreditar la razón de su dicho, se advierte que se cuenta con dos imágenes a color, las cuales se relacionan con la presunta existencia de propaganda político electoral prohibida mediante colocación y adhesión de imágenes impresas en el lugar ocupado por una

entidad pública municipal, en específico en la avenida Nayarit y calle 10, sobre el cerco perimetral del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la mencionada localidad, así como en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad; las cuales se ordenaron perfeccionar mediante diligencia de oficialía electoral, la cual fue consignada en el acta circunstanciada de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, en donde la funcionaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, señaló haberse constituido en las dos ubicaciones proporcionadas por el denunciante, y dio fe de que en ambas locaciones no se encontró contenido alguno de publicidad, como a continuación se señala:





A la anterior probanza, se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo establecido por el artículo 290 de la ley electoral local, toda vez que colma los requisitos establecidos por el artículo 41, fracción V del Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores Electorales del Instituto Estatal Electoral de Sonora, por cuanto de la misma se desprende que la funcionaria electoral se constituyó en el domicilio ubicado en la avenida Nayarit y calle 10, sobre el cerco perimetral del almacén del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como en un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, sobre la avenida 16 de septiembre y calle Sexta esquina Noroeste de esa ciudad, ambos de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, e hizo constar que en el primero de ellos observó un cerco de metal y dos postes de color amarillo, y en el segundo, la existencia de un poste de color gris, en ambos casos no se encontró publicidad colgada o adherida; diligencia que fue realizada en las ubicaciones que para tal efecto proporcionó el denunciante en su escrito.

6. Consideraciones de este Tribunal.

A juicio de este Órgano Jurisdiccional, en el presente caso no se acreditan los elementos constitutivos de la infracción que se le imputa al C. Jesús Alonso Montes

Piña, como candidato a Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, por el Partido Movimiento Ciudadano, consistente en la difusión y colocación de propaganda político electoral prohibida sobre el cerco de una propiedad del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la cita ciudad, y en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, por las razones que a continuación se exponen:

A fin de actualizar la infracción consistente en difusión indebida de propaganda político electoral, a que se refiere el artículo 298, fracción I, en relación con el diverso 208, párrafo cuarto, y el artículo 218, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del contenido del escrito inicial del promovente, se desprende que éste plasmó dos fotografías a color, con el objeto de demostrar la existencia de la propaganda objeto de la denuncia.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, la infracción que se pretende atribuir al ciudadano denunciado resulta inexistente, toda vez que de lo asentado en el acta de oficialía electoral de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, se desprende que la funcionaria electoral se constituyó en las ubicaciones proporcionadas por el denunciante, a fin de corroborar los hechos narrados en su escrito inicial, sin embargo, del resultado de dicha diligencia se advierte que se hizo constar la inexistencia de la publicidad denunciada en el presente juicio, dado que en el primero de los domicilios sólo observó la existencia un cerco de metal y dos postes de color amarillo y, en el segundo, la de un poste de color gris.

De igual manera, aunado a que no se corroboró la existencia de la propaganda político-electoral impresa objeto de infracción, a juicio de este Tribunal tampoco existen en el sumario, datos de prueba que permitan suponer, ni probar fehacientemente que el C. Jesús Alonso Montes Piña, ordenó, consintió o toleró la instalación de propaganda electoral alguna en favor de su nombre e imagen y del partido político que lo postuló, pues del contenido de la citada acta circunstanciada de oficialía electoral, no se advierte referencia alguna a los aquí denunciados; por tanto, al no existir pruebas idóneas para acreditar dicha acusación, ésta debe desestimarse de plano.

En cuanto a ello, se tiene que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante en términos del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la jurisprudencia 12/2010 de rubro **"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO**

O DENUNCIANTE", lo cual, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar".

Así las cosas, ante la falta de certeza de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que se muestra en las imágenes plasmadas en la denuncia, no resulta jurídicamente factible concluir que las mismas son suficientes para perfeccionar lo declarado unilateralmente por el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, por lo que se estima que no puede tenerse por acreditada la difusión indebida de propaganda político-electoral, por parte del ciudadano Jesús Alonso Montes Piña.

Con base en lo aquí expuesto, en apego al principio constitucional de presunción de inocencia y en términos del artículo 305, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se determina la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia y, en consecuencia, resulta innecesario abordar los argumentos que en vía de defensa vertieron los denunciados tanto en sus respectivos escritos de contestación como en la audiencia de alegatos celebrada en el presente caso, toda vez que lo aquí resuelto les beneficia y en nada cambiaría el sentido de la resolución.

Culpa in vigilando. En el caso resulta innecesario su análisis, en relación con el Partido Movimiento Ciudadano, ya que como quedó asentado, no se actualizó por parte del C. Jesús Alonso Montes Piña, la difusión indebida de propaganda político-electoral, en términos del artículo 298, fracción I, en relación con el diverso 208, párrafo cuarto, y 218 todos de la Ley electoral local, lo cual resulta suficiente para no atribuir al instituto político antes mencionado responsabilidad alguna bajo la figura de la *culpa in vigilando*.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 304 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se resuelve el presente asunto bajo el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando **QUINTO** de la presente resolución, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas por el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, en contra del C. Jesús Alonso Montes Piña, candidato a Presidente Municipal de San

Luis Río Colorado, Sonora, por el Partido Movimiento Ciudadano, por la difusión de propaganda político-electoral prohibida; así como lo atinente a la responsabilidad atribuida al instituto político de mérito, en la modalidad de *culpa in vigilando*.

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en los domicilios y/o medios señalados en autos, con copia certificada que se anexe de la presente resolución, y por estrados a los demás interesados.


Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión pública de fecha siete de agosto de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Leopoldo González Allard, Carmen Patricia Salazar Campillo y Vladimir Gómez Anduro, bajo la ponencia del primero en mención, ante el Secretario General, Licenciado Héctor Sigifredo II Cruz Iñiguez, que autoriza y da fe.- Conste.-



**LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD
MAGISTRADO PRESIDENTE**



**VLADIMIR GÓMEZ ANDURO
MAGISTRADO**



**CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO
MAGISTRADA**



**HECTOR SIGIFREDO II CRUZ IÑIGUEZ
SECRETARIO GENERAL**

